

Nuevas tecnologías de la información y políticas nacionales de comunicación: Europa/América Latina*

Migdalia Pineda de Alcázar**

Introducción

La penetración cada vez más acusada de las Nuevas Tecnologías de la Información en las distintas esferas de las sociedades contemporáneas (el trabajo, el tiempo libre, el hogar, la escuela) y el conjunto de transformaciones económicas, sociales, culturales e informativas que ellas producen está planteando importantes desafíos, tanto a los países en desarrollo como a los países desarrollados.

Aunque estos desafíos no son de las mismas dimensiones para un tipo de país u otro, no cabe duda que frente a la estrategia de internacionalización de los mercados, perseguida por las compañías productoras de estas tecnologías, algunos problemas tienden a ser similares, especialmente, el que tiene que ver con la problematización del tema sobre Políticas Nacionales de Comunicación.

* Ponencia presentada en la XVIII Conferencia de IAMCR/AIERI, realizada en São Paulo, Brasil, del 16 al 22 de agosto de 1992.

** Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela.

Comunicación y Sociedad (CEIC, Universidad de Guadalajara), núm. 18 - 19, mayo - diciembre 1993, pp. 109 - 129.

Teniendo presente que las opciones de planificación de la comunicación y la información no han sido iguales en Europa y América Latina, no podemos dejar de destacar el hecho de que esas diferencias en lugar de alejar, tienden a acercar a estas dos zonas del mundo en torno a algunos aspectos que le son comunes actualmente, como el problema de los desequilibrios informativos y comunicacionales, el control del poder económico, tecnológico y comunicativo de centros hegemónicos mundiales; y los peligros para la soberanía y la identidad cultural de algunas regiones del mundo que, con las diferencias del caso, se resisten a ser homogeneizadas básicamente por la cultura norteamericana.

Precisamente, los sentimientos compartidos son los que han hecho resurgir las propuestas de planificación de políticas de comunicación, pero replanteándolas ahora más allá de los medios masivos para abarcar los nuevos procesos informativos y de comunicación que hacen posibles los flujos de datos transfronteras y las redes informáticas en general.

El presente trabajo indaga sobre cuáles son los puntos de convergencia, pero también los de divergencia, que existen entre las políticas de comunicación europeas y latinoamericanas.

El desarrollo tecnológico y los desafíos europeos y latinoamericanos en políticas de comunicación

Las respuestas frente a los problemas planteados por las Nuevas Tecnologías de la Información, en lo que se refiere al campo de la comunicación, no pueden ser homogéneas debido a que dependen del contexto social, del nivel de desarrollo de cada país. No obstante, el nuevo papel de la información en las sociedades actuales ha comenzado a plantear, también en el seno de los países desarrollados, la necesidad de establecer Políticas de Comunicación globales que ayuden a planificar las actividades vinculadas a las telecomunicaciones, a la industria de la comunicación

audiovisual y a la industria de la información telemática en general. La importancia estratégica que han adquirido todas estas actividades para impulsar el desarrollo económico, industrial y social, ha llevado a países desarrollados como los de Europa Occidental, a partir de los años ochenta, a apoyar estas políticas.

Los altos índices de desarrollo industrial y tecnológico han permitido que algunos países desarrollados como Estados Unidos y Japón, se hayan convertido en líderes de la economía mundial, sobre todo, en sectores estratégicos (microelectrónica, informática, y telecomunicaciones) vinculados a la producción de las nuevas tecnologías de la información. La penetración de los productos informáticos y electrónicos de estas dos potencias en el mercado internacional ha servido de voz de alerta para que el resto de los países desarrollados, principalmente los europeos, comenzaran a señalar la existencia de desequilibrios y los posibles peligros que, en el campo concreto de la información y la comunicación, podrían aparecer ante la internacionalización de las nuevas tecnologías de la información con la consiguiente dependencia cultural que ella podría acarrear.

Ante esta situación, Europa Occidental comenzó a impulsar políticas en el seno de sus países, para cubrir, por un lado, la necesidad económico-industrial de consolidar una industria regional de nuevas tecnologías, concretada en una política de telecomunicaciones; y por el otro, para contrarrestar la dependencia cultural frente a la industria de la información y de la comunicación audiovisual norteamericana, concretada en una política de desarrollo y protección del sector audiovisual europeo.

Es en este contexto donde aparecen las diferencias de ópticas existentes entre la planificación de las comunicaciones en Europa y las Políticas de Comunicación latinoamericanas, las cuales han sido originadas por condiciones históricas que han otorgado posiciones diferentes en la escena económica internacional a ambos continentes y que han

originado en cada uno de ellos realidades sociales distintas y sistemas de comunicación totalmente opuestos.

En concreto, entre las diferencias en cuanto a la concepción de las políticas de comunicación encontramos:

En primer lugar, para América Latina, las Políticas Nacionales de Comunicación nacieron vinculadas a las luchas del Tercer Mundo por lograr un nuevo orden económico internacional, que en la década de los setenta se encontraba dominado básicamente por las transnacionales económicas y de la comunicación de Estados Unidos. De manera que las políticas de comunicación se plantearon como forma de frenar la penetración ideológica-política de este país en los latinoamericanos, y la información y la comunicación fueron vistas como instrumentos de ayuda para fomentar el desarrollo social y superar el atraso. Desde esta perspectiva, las Políticas Nacionales de Comunicación venían a estar vinculadas al concepto de "desarrollo", abarcando niveles más allá de lo informativo como la educación, la salud, la cultura, concibiéndose que los medios de comunicación en el Tercer Mundo debían ser utilizados para favorecer el desarrollo social, asistencial y cultural de los sectores más atrasados de estas regiones (rurales, campesinos y marginales).

En Europa, por el contrario, las Políticas Nacionales de Comunicación han surgido en la presente década vinculadas a la idea del "pluralismo informativo y comunicacional" como forma de lograr una apertura en los fuertes monopolios estatales presentes en la comunicación masiva de los países de esta región.

La planificación de la comunicación se ha dado dentro de un clima de desregulación de las telecomunicaciones que aparece ante la necesidad de potenciar la competitividad de las industrias de telecomunicaciones y de las industrias de la información y de la comunicación masiva.

La diferencia entre ambos orígenes está profundamente relacionada con las nuevas condiciones que adquieren, en esta etapa histórica, la información y la comunicación como

motores del desarrollo industrial y económico de los países más industrializados.

Esta situación hace que la planificación de las comunicaciones no sea vista en Europa únicamente, como una manera de frenar la penetración ideológica de las industrias informativas y de la comunicación norteamericanas o como un modo de impulsar el desarrollo, entendido en los términos de lo que este concepto ha significado para los países del Tercer Mundo (superación del atraso, del analfabetismo, mejores niveles de salubridad, de viviendas y de condiciones de vida), sino como una forma de responder al reto económico industrial que las nuevas tecnologías plantean hoy para las industrias electrónicas e informáticas europeas frente a las norteamericanas y japonesas.

En consecuencia, las políticas en el campo de las telecomunicaciones europeas son planteadas como una necesidad inevitable ante el hecho de que una apertura sin control de este sector, estratégico para mantener el lugar ocupado por los países europeos occidentales en el mercado internacional, podría significar una total invasión norteamericana o japonesa, en el campo no sólo de las producciones culturales masivas, sino en el de las industrias de las nuevas tecnologías de la información, y en el de la producción de *software* y de programas informáticos.

En predominio de una visión economicista en las políticas de comunicación europeas, donde se ha considerado que las Nuevas Tecnologías de la Información serían la salida ideal para relanzar sus estancadas economías, ha venido desplazando la atención de estas políticas del área de la cultura y la comunicación hacia el área de las telecomunicaciones y del desarrollo industrial de estas tecnologías. Dentro de esta perspectiva, el concepto de "servicio público" es cada vez dejado más a un lado en la planificación de las comunicaciones audiovisuales europeas, donde se ha empezado a desarrollar una industria de programas de carácter regional, capaz de producir una programación propia y suficientemente competitiva frente a la norteamericana.

No cabe duda que una política de comunicación pensada en los anteriores términos, podría ser adecuada, hasta cierto punto, para las necesidades de expansión económica de un país altamente industrializado mas no para las necesidades de desarrollo de un país subdesarrollado. Sin embargo, por encima de las diferencias en las concepciones de políticas de comunicación entre una región y otra, cabe destacar que ambas confluyen en cuanto a que se constituyen en respuestas para enfrentar el peligro que significa para su autonomía e independencia, la penetración indiscriminada de las transnacionales norteamericanas en sus realidades nacionales.

En segundo lugar, por lo que respecta al campo específico de la comunicación masiva, las políticas latinoamericanas planteaban la necesidad de que la comunicación fuese un área planificada por el Estado como órgano garante del interés público, ante el predominio del sector privado en los sistemas de comunicación de la región y ante la imposición de una programación extranjerizante (como promedio, más de 50% de la programación de las televisoras latinoamericanas es de origen extranjero) y de la mercantilización de la información (Capriles 1976: 54). Mientras que en Europa se ha considerado que las políticas de comunicación deben ir más allá de un conjunto de medidas y controles aplicados por el Estado, para dar paso a una liberalización controlada que ponga fin al monopolio estatal sobre los medios y que haga posible la descentralización progresiva y la participación del sector privado en las comunicaciones audiovisuales como forma de garantizar el pluralismo informativo y comunicacional (López Escobar 1978).

Las Políticas de Comunicación en Europa han surgido en torno a un debate sobre cómo garantizar la libertad de información y, al mismo tiempo, planificar las comunicaciones. En este debate el gran cuestionado no ha sido el sector privado, como en América Latina, sino el Estado, especialmente en lo que se refiere a su política de control de las televisiones públicas (Costa Badia 1986: 271) y frente a la

cual han aparecido dos posturas políticas diferentes: la de corte socialdemócrata, que sostiene que el control de los medios debe ser ejercido por el Estado aunque se permita una apertura de las comunicaciones (posición defendida por el gobierno actual francés, por los socialdemócratas de Alemania Occidental y por el gobierno socialista español); y la de corte liberal, según la cual los medios deben ser liberalizados al máximo para fomentar la competencia, y, con ello, la pluralidad (posición defendida por el gobierno conservador de Margaret Thatcher, en Gran Bretaña, y por el gobierno de Giscard d'Estaing en Francia).

A pesar de estas diferencias, tanto en América Latina, como en Europa, las propuestas de políticas de comunicación surgen como forma de enfrentar el control ejercido por el sector que domina en el sistema comunicacional de ambas regiones: privado, en América Latina, y público, en Europa. Enfrentamiento que da cuenta de un fuerte cuestionamiento frente a toda forma de concentración del poder de decisión en manos de los dueños de los medios o del sector político-gubernamental de turno.

En tercer lugar, la naturaleza diferente del sector al cual se enfrentan las políticas de comunicación en ambas regiones hace que los peligros en torno al eje estatización-liberalización aparentemente supongan desafíos muy distintos, aunque en el fondo sean convergentes para ambas realidades.

Si en América Latina el riesgo consistía en que el protagonismo del Estado en la planificación de las políticas podría originar una fuerte centralización de las comunicaciones y, por consiguiente, la pérdida de la libertad y de la pluralidad; en Europa, en cambio, el riesgo consiste en que una liberalización total puede dar cabida a una monopolización económica e informativa de los medios en manos de los sectores privados.

No obstante, por detrás de estas dos formas de peligro, el problema de la concentración/descentralización, en ambos casos, gira en torno al asunto crucial de la demanda de una democratización de las comunicaciones que, ante la apari-

ción de las nuevas tecnologías de la información, vuelve a ser sentida como prioridad de cualquier política de comunicación. Lo que esta situación común plantea es la necesidad de definir una política que dé cabida a las distintas posibilidades de información y a las distintas alternativas de comunicación, frente a las cuales tanto el modelo privado como el público parecen haber agotado sus posibilidades, al haber resultado incapaces de ampliar las formas de acceso y participación de la sociedad civil en la gestión de las comunicaciones.

Por un lado, el modelo privado latinoamericano, al basarse en la concepción liberalista de la prensa, favoreció el acceso a los medios de grupos de poder político o económico, adaptables a la estructura dominante en los mismos. Por el otro, el modelo de comunicación europeo antes de los procesos de liberalización que se han producido en países como el Reino Unido, Francia, Italia, España, la República Federal de Alemania y otros, al sustentarse en el principio de servicio público entendido como monopolio absoluto del Estado, había servido para restar vitalidad y creatividad a los medios públicos de la región, ante la ausencia de estímulos provenientes de la competencia que podrían haber reducido el exceso de burocratización de los entes estatales, encargados de la gestión de los medios de comunicación, y el marcado tinte gubernamentalista en la orientación de los mismos.

En el contexto de los años ochenta, la anterior idea europea de servicio público muestra su incapacidad para dar cuenta de la nueva realidad de la comunicación en la sociedad de la información, tanto en los países desarrollados como en los subdesarrollados. Esta incapacidad tiene que ver con el hecho de que el servicio público como prerrogativa exclusiva del Estado tiende a chocar con las posibilidades diversas que ofrecen las nuevas tecnologías de la información para conceder participación descentralizada a los sectores desplazados, hasta ahora, de los modelos de comunicación dominantes a nivel internacional. En este sentido, tanto para

las políticas de comunicación europeas como latinoamericanas, el desafío consiste en comenzar a construir las bases para ayudar a definir un nuevo modelo de comunicación que, respetando las condiciones específicas de la realidad estructural de ambas regiones y como respuesta frente a ella, esté basado en el concepto de "información como bien social" y rescate el sentido del concepto de "interés público" como estrechamente vinculado a grupos de la sociedad civil, sean éstos institucionales o no.

En ambas regiones, el establecimiento de un modelo de comunicación colectivo, público y plural (Pares I Maicas 1986: 36), alejado de cualquier idea de monopolio estatal o privado sobre los medios de comunicación, es la opción más democrática frente a la realidad comunicacional y social que plantean las nuevas tecnologías de la información.

Para América Latina un modelo de esta naturaleza podría servir de instrumento valioso para potenciar la participación social del pueblo y de las comunidades marginadas en la elaboración de su propio modelo de sociedad y de comunicación. El papel del Estado, en este modelo, debería estar centrado en el fortalecimiento y la movilización de las manifestaciones populares que tienen lugar en los espacios de la vida cotidiana, en el entorno inmediato de las personas, en las prácticas culturales, religiosas y políticas de los sectores alejados de la comunicación dominante (Martín Barbero 1986:165).

Sin embargo, en la realidad de América Latina, está claro que dicha tarea no puede ser emprendida por los tipos de Estado (democráticos formales o de facto) que prevalecen hoy día en la región. Hace falta, necesariamente, un nuevo modelo de gestión de la sociedad que significa no solamente "desprivatizar" los medios —cuestión difícil de conseguir sin un cambio estructural en las relaciones de poder— sino desestatizar progresivamente la administración de las comunicaciones, para ir dando protagonismo a la sociedad civil y, especialmente, a las minorías culturales y étnicas. Ello tiene que ver no solamente con una apertura del modelo masivo

dominante hacia las expresiones culturales y lingüísticas de estos grupos, sino con fomentar mecanismos paralelos y alternativos de expresión de estas culturas, y con permitir que estas comunidades participen en la toma de decisiones en el campo de la comunicación y de la cultura. La necesidad de participación se hace cada vez más perentoria en América Latina debido a que las primeras decisiones tomadas con respecto a las primeras nuevas tecnologías introducidas —los satélites de comunicación— se realizaron al margen de las organizaciones sociales más representativas, y al margen de un debate público sobre la adopción de estas tecnologías, situación que ayudó a debilitar el papel del Estado como guardián del interés público en las negociaciones con los sectores privados, como fue el caso de México (Fadul, Fernández y Schmucler 1985: 30).

Para Europa, la desestatización de la administración de las comunicaciones, entendida como ruptura con todo posible control del aparato burocrático estatal en los medios masivos (Cesareo 1983: 32), exige por parte del Estado un replanteamiento de su papel actual en cuanto a defensor del interés general, para ir cediéndolo a favor de una mayor participación de los usuarios o sectores sociales interesados en la definición y en la participación en la toma de decisiones sobre políticas de comunicación que les afectan.

Ante la tendencia presente en las sociedades actuales hacia la privatización del Estado, es decir, hacia un acercamiento progresivo del Estado (como expresión de lo público) y de lo privado (Mattelart y Piemme 1981), se hace necesario un rescate de "lo público" desde el seno de la sociedad civil misma, y esto es válido tanto para los países europeos como para los latinoamericanos, donde el dilema más importante para la planificación de las políticas de comunicación tenderá a centrarse en torno al eje de participación de la sociedad civil/control centralizado de las comunicaciones.

En este interés mutuo por establecer una estrategia de planificación, tendente a corregir los desequilibrios informa-

tivos, comunicacionales y tecnológicos, y por establecer "otro nuevo orden de la comunicación y de la información", la incorporación de Europa es fundamental sobre todo por lo que podrían representar sus valiosos aportes sobre algunos aspectos estratégicos para definir un modelo de comunicación más democrático y participativo, a saber:

- El aporte centrado en "la comprensión ideológica de los medio masivos" desde una concepción del tipo de Estado con el que se vincula, y que ha servido para cuestionar tanto la concepción liberal de los medios como la concepción leninista del Estado, al considerarlos enfoques actualmente inadecuados para dar cuenta de una política de comunicación democrática. Proponiendo, como contrapartida, una tercera opción de servicio público como expresión de un control de las comunidades, alejado del control estatal o privado.¹

Este planteamiento cobra una gran importancia dentro de las propuestas latinoamericanas de políticas de comunicación, donde paradójicamente los medios son privados, no cubren todo el tejido social, porque no llegan a toda la población, como sí ocurre en la mayoría de los países desarrollados, y donde el surgimiento de experiencias de comunicación al margen de los medios constituyen una muestra palpable de que el modelo masivo no es el instrumento de expresión de los grupos populares.

- El aporte de la nueva concepción de la información como saber/conocimiento, fundamental para la acción social en las sociedades de la información, cuya concentración bajo la forma de bancos de datos especializados viene a representar un nuevo elemento de análisis. La importancia de este enfoque para América Latina radica en el hecho de que él podría ayudar a vislumbrar una estrategia para que el Tercer Mundo, en general, pueda articular formas de acceso a estos bancos de datos, o para que se puedan desarrollar redes y bancos de datos alternativos o propios.

1. Esta alternativa sería definitiva como "un espacio público audiovisual" opuesto al monopolio del Estado como a la privatización (ver Costa Badia, P. Oriol 1986: 347).

En este campo la reflexión europea ha llamado la atención sobre los desequilibrios que se producen en las relaciones internacionales como consecuencia de la alta concentración de datos en Estados Unidos (65% de las grandes memorias científicas, técnicas y económicas existentes en el mundo son de origen norteamericano) (Cremerius 1980: 102), y sobre el peligro que esta concentración podría producir para la autonomía y la independencia de los países que no estructuren sus propias bases de datos y que no intenten establecer vinculaciones, a través de redes informáticas no centralizadas, con otros países del mundo que hagan posible romper el esquema bilateral o unilateral de conexión exclusiva con las grandes potencias.

Para América Latina estos señalamientos han representado un valioso aporte, debido a que su dependencia frente a los bancos de datos especializados sobre información técnica agrícola, médica, económica y socio-cultural, viene a añadir un nuevo desequilibrio a los de tipo estructural que han caracterizado sus relaciones con los centros mundiales de poder.

La conceptualización de la información como materia económica básica en las relaciones internacionales actuales, ayuda a entender como, en este nuevo contexto, la extracción de recursos de información (datos brutos o informaciones sin procesar sobre recursos energéticos, materias primas, recursos naturales, realidades económicas y políticas) se convierte en una nueva forma de extracción de plusvalía y expoliación de los recursos de los países en desarrollo, con situación de ventaja para los países desarrollados. Esto viene a demostrar que, en la nueva fase de acumulación del capital, la información es un recurso estratégico de desarrollo y, en consecuencia, cualquier expropiación de este recurso por parte de una nación en situación de superioridad sobre otra más débil, se convierte en una forma de explotación que viene a añadir una nueva situación de desequilibrio y de desigualdad.

La especificidad de este nuevo tipo de desequilibrio, fundamentado en la posesión centralizada de un recurso no material sino intelectual, plantea directas repercusiones sociales y culturales en la reformulación de las políticas de comunicación latinoamericanas, pero también en la definición de las políticas de aquellos países desarrollados en situación de desventaja frente a Estados Unidos.

Por eso, la cuestión fundamental no es solamente constituir infraestructuras informáticas y telemáticas que reduzcan, en parte, estos desequilibrios, sino abrirlas al pluralismo, a la participación descentralizada para potenciar la producción de alternativas culturales que se enfrentan a los peligros de la penetración cultural.

Frente a la posibilidad de que aumenten los desequilibrios entre países y sectores socioeconómicos debido a la centralización de los bancos de datos, existen dos problemas que preocupan tanto a Europa como a América Latina. El primero tiene que ver con la constatación de que la información disponible en esos bancos de datos no es útil para todos, sobre todo aquella relativa a aspectos científicos, técnicos o económicos, no solamente porque algunos países o personas todavía no tienen acceso a esta información sino porque para tener acceso a los bancos de datos que la contienen, y para poner en práctica la misma de una manera eficaz, se necesita, por ahora, contar con especialistas que dominen el lenguaje del ordenador y que tengan capacidades para aplicarla.

El segundo problema está relacionado con los altos costes y tarifas que se necesitan para transferir información a través de las redes telemáticas, que la hacen inaccesible para la mayoría de las personas y para los países más pobres.

Antes de las nuevas tecnologías de la información, las memorias de datos eran constituidas a través de métodos artesanales tradicionales y su acceso era gratuito, debido a que básicamente era el Estado el encargado de ponerla libremente a nuestra disposición. Pero, cuando la información devino en una forma de producción (gracias a su explosión

cuantitativa y a la rapidez de almacenaje, tratamiento y distribución que permiten las nuevas tecnologías), y se informatizó, llegó a adquirir un precio demasiado alto, inaccesible para la mayoría de las personas e, incluso, para algunas instituciones. Por ejemplo, al Centro francés "La Documentación francesa" le cuesta una hora de consulta al banco de datos del *New York Times* (*Infobank*) la cantidad de 615 dólares (Cremieux 1980: 103).

- Relacionados con las dos preocupaciones anteriores, Europa aporta también dos conceptos, el de "cooperación horizontal" y el de "comunicación interinstitucional" que han servido para enriquecer las propuestas iniciales de políticas nacionales de comunicación en América Latina.

Sobre la cooperación horizontal, la novedad se encuentra en el hecho de que Europa extiende este concepto no solamente a la necesidad de establecer mecanismos de cooperación con los países en vías de desarrollo en el área de la comunicación masiva y, especialmente, en el campo audiovisual —objetivo de una política de comunicación centrada exclusivamente en los medios—, sino fundamentalmente en el área de la información contenida en los bancos de datos, como forma de consolidar una plataforma común en defensa de la soberanía social, económica y cultural, tanto en los países dependientes como en los desarrollados (Matterlart 1984: 116), en situación de desventaja frente a las grandes potencias.

Esta aportación europea, en pro de una cooperación internacional para reducir los desequilibrios, enriquece el planteamiento latinoamericano sobre la necesidad de que la democratización de las comunicaciones, a lo interno de cada país, esté ligada a un proceso de democratización internacional (Bustamante 1986: 139).

En este campo, Europa ha insistido sobre la prioridad de formar acuerdos de cooperación que aseguren el pluralismo de las fuentes de información y de las bases de datos, que permitan que las opciones de éstas, como las conectadas a las redes Peacenet, en San Francisco; Geonet, en Londres;

Interdoc, en Roma; Ired-La, en América Latina; Apic, en Asia y el Pacífico; y Favdo, en Africa,² puedan ser colocadas con un *status* internacional; y que ayuden a la creación y consolidación de bases de información plurinacionales, especialmente en los países en desarrollo, como forma de garantizar un acceso equitativo a los menos ricos y de facilitar aplicaciones informáticas a favor del Tercer Mundo (Cremieux 1980: 108)

Sobre el segundo concepto, el de la comunicación inter-institucional, Europa ha insistido sobre su necesidad, como forma de evitar que el poder se rodee de secretos o de informes confidenciales que podrían atentar contra la transparencia en el ejercicio de la administración pública democrática.

En este sentido, los planteamientos europeos han llamado la atención sobre la importancia de descentralizar la información de los organismos e instituciones sociales, gubernamentales o no, a modo de garantizar que los ciudadanos puedan disponer de información suficiente y necesaria para participar críticamente en la toma de decisiones sociales. No cabe duda que esta posición afectaría a los modos de gestión de la administración pública, y plantea un proceso de participación democrática no solamente en la esfera comunicacional sino, sobre todo, en la esfera política (Bustamante 1986: 143).

La integración de este concepto a las políticas de comunicación en América Latina es fundamental, porque tendría que ver con una reformulación política de las formas de

2. Estas redes forman parte de las denominadas "redes electrónicas alternativas", creadas desde 1984 por Organismos de Desarrollo no gubernamentales, grupos solidarios y Centros de Documentación Independientes, pertenecientes a países del Norte y del Tercer Mundo; las cuales permiten que a través de microordenadores se intercambien información básica para la toma de decisiones y para la acción social a favor de los grupos desfavorecidos o marginados (ver *Revista Media Development*, núm. 4, vol. XXXIV, London, 1987).

vinculación existentes en la región entre los ciudadanos y los encargados de la administración estatal.

La tendencia predominante en Latinoamérica, en cuanto a la toma de decisiones sociales, es la casi ausencia de la participación de la sociedad en los asuntos que les afectan, (trabajo, salud, educación, vivienda, seguridad social, desarrollo rural), debido a que generalmente las decisiones son tomadas por el Estado o los sectores de poder político o económico. Tampoco existe en la región una tradición en el sentido de que el usuario promedio cuestione el sistema de comunicación prevaleciente, basándose para ello en la defensa del "interés público" de las comunicaciones.

La falta de información de la mayoría de las personas de América Latina, especialmente de las pertenecientes a sectores económicos inferiores o marginales, los altos índices de analfabetismo dentro de estos sectores, y la poca transparencia en las gestiones de poder —incluyendo a la de los medios masivos dominantes— contribuyen a fomentar la pasividad del ciudadano medio frente a los problemas de su entorno inmediato, ante los cuales se suele adoptar una actitud conformista y de no participación social. Aunque existen experiencias de organización comunal, barrial y grupal en torno a problemas específicos comunitarios (asfaltado de las calles, recogida de basura, sistemas de vigilancia, organización sindical o política), éstas se realizan al margen de las instituciones gubernamentales y, la mayoría de las veces, paralelas a ellas, y no han planteado al poder estatal su derecho a exigir la transparencia de la gestión del Estado como tal y a disponer de información vital para poder participar igualmente en la toma de decisiones sociales.

- Por último, la investigación crítica europea ha insistido sobre la necesidad de redefinir teóricamente algunos conceptos básicos de la comunicación que, ante los profundos cambios ocurridos en el sistema de comunicación, resultan hoy inadecuados. Conceptos que, una vez redefinidos, deberían tomarse en cuenta en una reformulación de las políticas de comunicación.

En este campo, Miquel de Moragas I Spà señala que esta redefinición deberá incluir la noción de "ámbito o espacio de recepción comunicativa", como base para estructurar una nueva tipología de los medios de comunicación que dé cuenta de las transformaciones introducidas por las nuevas tecnologías de la información en las prácticas comunicativas.

Según este autor, la redefinición de las políticas de comunicación debe incluir este concepto porque él permite expresar las alteraciones producidas en los planos de recepción de la comunicación, dicotomizados en dos niveles con características propias, el transnacional y el local. Niveles que en las anteriores propuestas de políticas de comunicación, basadas en la exclusiva planificación de los medios masivos, no habían sido considerados.

La reubicación de las políticas de comunicación desde el plano de recepción transnacional daría cuenta de los flujos informativos transnacionales que penetren en el espacio comunicativo de una nación, gracias al desarrollo de redes telemáticas, de satélites y de bancos de datos especializados. Mientras que desde el plano de lo local se daría cuenta de las experiencias de información y de comunicación del ámbito local que sirven para motorizar la participación democrática de los grupos sociales en la organización comunal, vecinal, regional.

El ámbito de lo local aparece dentro de esta reformulación como la esencia misma de la democratización de las comunicaciones, y viene a constituir el espacio de la denominada "mesocomunicación" que hace referencia al ámbito de comunicación donde la realidad social aparece más próxima a la experiencia del individuo y a su entorno inmediato, y donde la información podría estar orientada hacia la acción social (Moragas 1986b: 11).

En la realidad de América Latina estos dos espacios de comunicación, lo local y lo internacional, deberán ser integrados en las políticas de comunicación democráticas, pero teniendo presente que lo local, como ámbito más allá de lo

público (del Estado) y de lo nacional (del centralismo de la comunicación masiva), aunque está más cerca de lo cotidiano de cada uno y de sus experiencias comunitarias, no puede estar separado de esa otra contrapartida comunicativa posibilitada por las nuevas tecnologías de la información, la del ámbito internacional, que en América Latina adquiere características específicas.

Para el contexto europeo el ámbito de lo local aparece como el espacio más cercano a la realidad vivida por los individuos dentro de los términos de una democracia social que parte de la idea de la igualdad de todos los ciudadanos y, por este motivo, lo local se convierte en un elemento estratégico para definición de una política de comunicación alejada de todo control absoluto del Estado sobre los medios. Para Latinoamérica, y para los países del Tercer Mundo en general, el ámbito de lo local, dentro de una redefinición de las políticas nacionales de comunicación, debería prolongarse más allá del entorno inmediato hacia el contexto internacional para poder cohesionar las experiencias de este tipo a las realizadas por otros países con problemas de desigualdad y desequilibrios parecidos.

La poca fuerza que tuvieron las experiencias de comunicación alternativa —donde lo local aparecía como dimensión central— sirven hoy para justificar la necesidad de establecer una estrategia con base en la categoría “ámbito de recepción comunicativa” que no esté reducida ni a lo estatal-nacional ni a lo local-grupal.

Por un lado, en Latinoamérica, lo local —en términos democráticos— no puede ser comprendido en el mismo sentido de como lo es para Europa, la presencia de desigualdades abismales en el subdesarrollo hace que la democracia, entendida como igualdad de todos los individuos, sea una entelequia para todo el Tercer Mundo. Ante las fuertes contradicciones presentes en estos países, lo local se vuelve una experiencia de clase y muchas veces la realidad cercana a la experiencia personal no es sentida de forma igual por individuos que conviven en un entorno próximo, e incluso,

en un mismo barrio, donde al lado de residencias lujosas pueden coexistir las chabolas más míseras. Por el otro, la fuerte penetración de la información y la comunicación transnacional, desde hace ya varios años (Portales, Casullo, Schmucler *et al.* 1982), en estos países, hace que cualquier estrategia limitada a lo meramente local pierda fuerza contestataria al ser diluida por una comunicación nacional estrechamente vinculada a la transnacional, favorecida por la existencia de sistemas de comunicación privados y en manos de las burguesías nacionales.

Por estos motivos, aunque las experiencias de comunicación local nacieron en América Latina como respuesta a la comunicación masiva dominante,³ se hace necesario que ellas sean vinculadas a proyectos internacionales, sobre todo con otros países del Tercer Mundo o con países desarrollados dispuestos a la cooperación. La aparición de las nuevas tecnologías de la información desplazan, por un lado, el ámbito de la comunicación nacional y de la local hacia el de la información transnacional y planetaria; y por el otro podrían ayudar a consolidar la fuerza de organización de la comunicación local descentralizada y al margen de la comunicación masiva dominante. Pero esta última posibilidad, en el contexto de los países dependientes y subdesarrollados, no puede estar desvinculada de una estrategia integral de políticas de comunicación que enfrente los peligros de una cada vez más creciente penetración transnacional.

Teniendo presentes estas diferenciaciones, una nueva tipología de los medios de comunicación, además de dar cuenta de los cambios introducidos por las tecnologías de la información, deberá estar cargada de sentido contextual que haga posible explicar los matices, las especificidades que adquieren las nociones que la comprenden dentro de realidades sociales diferentes.

3. Un balance sobre las experiencias de comunicación alternativa se puede ver en Reyes Matta, Fernando (ed.) *Comunicación Alternativa y Búsquedas Democráticas*. ILET, México, 1983.

BIBLIOGRAFÍA

- BUSTAMANTE, Enrique (1986) "Políticas de Comunicación: un reto actual", en M. Moragas (ed.) *Sociología de la comunicación de masas*. Barcelona: Gustavo Gili, tomo IV, p. 139.
- CAPRILES, Oswaldo (1976) *El Estado y los medios de comunicación*. Caracas: SUMMA.
- CESAREO, Giovanni (1983) "La forma de aparato en los Mass Media", en G. Richeri (ed.) *La televisión entre el servicio público y el negocio*. Barcelona: Gustavo Gili.
- COSTA BADIA, Per Oriol (1986) *La crisis de la televisión pública*. Barcelona: Paidós.
- CREMIEUX, Jean Louis (1980) "Les banques de données et les transferts de culture", en *Informatique, coopération internationale et indépendance. La Documentation Française*, vol. IV, París.
- FADUL, Ligia; Fátima FERNÁNDEZ y Héctor SCHMUELER (1985) "Satélites de Comunicación en México" *Comunicación y cultura*, núm. 13, México.
- LÓPEZ ESCOBAR, Esteban (1978) "Análisis del nuevo orden internacional de la Información". Pamplona: Edic. Universidad de Navarra.
- MARTÍN BARBERO, Jesús (1986) "Comunicación, pueblo y cultura en el tiempo de las transnacionales" en M. Moragas (ed.) *Sociología de la comunicación de masas*. Barcelona: Gustavo Gili, Tomo IV.
- MATTELART, Armand y Michéle; X. DELCOURT (1984) "¿La cultura contra la democracia?". Barcelona: Mitre.
- MATTELART, Armand y Jean PIEMM (1981) "La televisión alternativa". Barcelona: Anagrama.
- MORAGAS, Miquel (ed.) (1986a) *Sociología de la comunicación de masas*. Barcelona: Gustavo Gili, tomo IV.

- (1986b) “Transformaciones tecnológicas y tipología de los medios. Importancia política de la noción de ámbito de comunicación”, en *Sociología de la Comunicación de Masas*. Barcelona: Gustavo Gili.
- PARES I MAICAS (1986) “El control público de la televisión”, TELOS, núm. 7. Madrid: Fundesco.
- PORTALES, Diego; Nicolás CASULLO; SCHMUCLER y otros. (1982) “Comunicación Transnacional: conflicto político y cultural”. Lima: DESCO/LET.